



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, dos (2) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

REFERENCIA:	COMPLEMENTA SENTENCIA DE TUTELA
DEMANDANTE:	GLADYS ROCÍO VÁSQUEZ PUERTA
DEMANDADO:	PROTECCIÓN S.A., EPS SURA y otros
RADICADO:	05 001 22 05 <u>000 -2021- 00327</u>
ACTA N° :	091

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN** y **MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, procede a complementar la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2021.

A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto como consta en el **acta 91** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado como sigue:

1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES

La señora GLADYS ROCIO VASQUEZ PUERTA, interpuso la presente acción de tutela invocando el amparo de sus derechos fundamentales a la vida digna, el derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, mínimo vital, derechos de los limitados físicos, psíquicos y sensoriales, solicitando se ordenara de manera conjunta o por separado a las accionadas, el pago pago de las incapacidades o salarios y prestaciones sociales a que tiene derecho desde octubre de 2016¹.

En sentencia proferida por esta corporación el 25 de noviembre de 2021 se tomaron las siguientes decisiones²:

PRIMERO: CONCEDER la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna, a la igualdad y la estabilidad laboral reforzada de la señora **GLADYS ROCÍO VASQUEZ PUERTA**

SEGUNDO: ORDENAR a **TENNIS S.A. EN REORGANIZACION** mantener el vínculo laboral con el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social (Salud y Pensiones) para garantizar las prestaciones asistenciales y económicas de la demandante, mientras le es reconocido el derecho pensional.

¹ C01- ProcesoConstitucional- SubsidiolIncapacidadProtección- archivo 01

² C01- ProcesoConstitucional- SubsidiolIncapacidadProtección- archivo 93

Y que dentro de las **cuarenta y ocho (48) siguientes** a la notificación de esta providencia, adelante las gestiones administrativas necesarias para que, a partir de los **principios de dignidad humana, respeto, autonomía individual, igualdad, equidad, solidaridad, inclusión y enfoque de género** consagrados en la normatividad vigente, adopte en el marco de un plan de medidas de inclusión con acciones concretas, **en procura de un mejoramiento de la calidad de vida de su trabajadora**, mientras se mantenga el vínculo laboral, conforme el análisis efectuado en la parte motiva. En el mismo término, detallar los conceptos que involucran la suma pagada con ocasión de este proceso (\$1.997.613) e informarlo a su trabajadora, y en adelante, continuar efectuando el pago oportuno de la prestación social a su cargo, notificándole cada vez que éste se realice

TERCERO: ORDENAR a PROTECCION S.A. que a más tardar en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, cancele las incapacidades dejadas de pagar a la señora **GLADYS ROCÍO VASQUEZ PUERTA** desde el mes de **octubre de 2016**, hasta que el Fondo de Pensiones **reconozca y pague** la mesada **por invalidez o por pensión especial de vejez por deficiencia**, según fuera el caso; garantizando que no exista solución de continuidad entre el pago del subsidio y la mesada pensional, resguardando de ese modo su derecho al mínimo vital . **Y solo a partir de ese momento, cesarán los efectos de este fallo.**

Con sentencia **STL 1420 -2022** la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral tomó las siguientes decisiones³:

PRIMERO: Revocar parcialmente el numeral tercero del fallo impugnado, el cual quedará así:

***TERCERO: ORDENAR a PROTECCION S.A.** que a más tardar en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, cancele las incapacidades dejadas de pagar a la señora GLADYS ROCÍO VASQUEZ PUERTA desde el mes de octubre de 2016, hasta que se defina jurídicamente si tiene derecho o no a la pensión; garantizando que no exista solución de continuidad entre el pago del subsidio y la eventual mesada pensional, resguardando de ese modo su derecho al mínimo vital. Y solo a partir de ese momento, cesarán los efectos de este fallo.*

SEGUNDO: Confirmar en los demás aspectos el fallo impugnado.

Ante el requerimiento efectuado a PROTECCIÓN S.A. con el fin de que diera cumplimiento a lo ordenado en el trámite constitucional, la accionada manifestó desconocer qué incapacidades habían sido emitidas con posterioridad al 4 de febrero de 2016, última incapacidad reconocida por parte de **EPS SURA** a favor de la accionante, señalando expresamente⁴:

"En este orden de ideas, la accionante deberá aportar las supuestas incapacidades emitidas desde octubre de 2016, ya que estas no se encuentran debidamente radicadas ante Protección S.A. y por ende, mi representada desconoce cuales incapacidades deben ser pagadas, y a que periodos corresponden".

³ C03TrámteCumplimiento - archivo 02

⁴ C02IncidenteDesacatoRdo000202100327- archivo 13

Ante las manifestaciones efectuadas por la activa en relación con la imposibilidad de obtener los certificados de incapacidad desde octubre de 2006 y que a pesar de asistir a las citas de control de manera regular el médico tratante le informa sobre la imposibilidad de emitirlos, se le requirió para que allegara la historia clínica actualizada⁵. Adicionalmente, se decretó como prueba recibir el testimonio del doctor BASILIO VAGNER⁶, diligencia realizada el pasado 29 de noviembre⁷.

2. PROBLEMA JURÍDICO

Atendiendo a las circunstancias que se presentan en este caso, en el que se ha emitido una orden en contra de PROTECCIÓN dirigida al pago retroactivo de subsidios por incapacidad y a continuar haciéndolo hasta que se defina jurídicamente si la accionante tiene derecho o no a la pensión; y en la medida en que la emisión de las incapacidades se encuentra a cargo de la **EPS SURA** a la que se encuentra afiliada la accionante, esta corporación debe resolver el siguiente problema jurídico: ¿Desconoce un juez de tutela el principio de la cosa juzgada y con ello el derecho al debido proceso, al alterar la orden impartida en la sentencia que dio fin al proceso, en actuaciones procesales posteriores a ésta y encaminadas a lograr el cumplimiento de la misma? ¿Para garantizar el cumplimiento de la orden emitida a PROTECCIÓN en el proceso constitucional, resulta procedente emitir órdenes a la accionada en el proceso **EPS SURA**?

3. LA MODIFICACIÓN DE LAS ÓRDENES EMITIDAS EN EL PROCESO CONSTITUCIONAL PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO Y ASÍ EL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES TUTELADOS

Según lo ha reiterado la Corte Constitucional al referirse al inciso primero del artículo 243 de la Constitución, la acción de tutela se encuentra sujeta a los parámetros de la cosa juzgada.

La cosa juzgada es una institución jurídico procesal que hace inmutables, vinculantes y definitivas las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias⁸. Busca asegurar que las controversias que ya han sido decididas por las autoridades judiciales competentes no sean reabiertas, y garantiza la seguridad jurídica de los fallos judiciales.

⁵ C03TrámteCumplimiento - archivo 03

⁶ C03TrámteCumplimiento – archivos 05 y 06

⁷ C03TrámteCumplimiento - archivos 11 y 12

⁸ Sentencia C-100 de 2019.

Así, es claro que una vez fallado un caso por parte de los jueces (en primera y segunda instancia, si se presenta impugnación), el expediente debe remitirse a la Corte Constitucional para que esta decida si el caso será revisado o excluido⁹. En el primer escenario, la propia Corporación emite un fallo que luego de su ejecutoria será inmutable, y, en el segundo, esa misma inmutabilidad se predica de la sentencia proferida por los jueces de instancia a partir de la ejecutoria del Auto que desecha la selección, operando así la *cosa juzgada constitucional*¹⁰.

Pero en ciertos eventos excepcionales, **el juez de tutela tiene una competencia especial para modular las órdenes en las circunstancias del caso concreto con el fin de asegurar el goce efectivo del derecho amparado**, siendo claro que tal modificación en manera alguna puede recaer sobre la decisión de amparo, es decir, de la determinación de si se concede o no la protección solicitada mediante la acción de tutela, sino respecto de las ordenes específicas y necesarias para garantizar el goce efectivo del derecho amparado. Así lo ha explicado la Corte Constitucional en la sentencia **T 086 de 2003** al definir el alcance del **artículo 27 del Decreto 2591 de 1991**:

"El principio de la cosa juzgada se aplica en términos absolutos a la primera parte del fallo, es decir, a *lo decidido*. Por lo tanto, la decisión del juez de amparar un derecho es inmutable y obliga al propio juez que la adoptó. Como la orden es consecuencia de la decisión de amparo y su función es la de asegurar el goce efectivo del derecho en el contexto fáctico particular de cada caso, los efectos de la cosa juzgada respecto de la orden específica tienen unas características especiales en materia de acción de tutela. Las órdenes pueden ser complementadas para lograr "el cabal cumplimiento" del fallo dadas las circunstancias del caso concreto y su evolución. Tal fue la determinación del legislador extraordinario, quién definió en el propio estatuto de la acción de tutela (Decreto 2591 de 1991) que el juez no pierde la competencia, y está facultado a tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la decisión, es decir, proteger el derecho fundamental afectado.

(...)

3.3. Por lo tanto, el juez de tutela no desconoce el orden constitucional vigente al modificar o alterar aspectos accidentales del remedio dispuesto para evitar que se siga violando o amenazando el derecho fundamental de una persona que ha reclamado su protección, siempre y cuando lo haga en aquellos casos en que sea necesario para asegurar el goce efectivo del derecho y dentro de los límites de sus facultades. Es el propio ordenamiento, en el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, el que mantiene en cabeza del juez de tutela la competencia para adoptar las medidas encaminadas a que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza".

Ahora bien, de acuerdo al precedente constitucional sobre la materia **(SU 034 - 2018, T606 -2011, T 086-03)** la competencia del juez de tutela para modificar las órdenes se encuentra restringida a unos eventos especiales cuyos parámetros han

⁹ Constitución Política de Colombia, artículo 86 –inciso segundo–: "La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión".

¹⁰ T-661 de 2013, T-246 de 2018, T-427 de 2017, T 235-2020

sido precisados por la Alta Corporación, definiendo cuándo es posible que el juez de tutela modifique la orden judicial impartida originalmente, cuál es el fin al que se debe propender al introducir este cambio y cuáles son los límites y alcances de esta facultad:

La labor del juez en sede de tutela no acaba, entonces, en el momento de proferir sentencia y renace cuando alguna de las partes vuelve a plantear el caso, por ejemplo, en un incidente de desacato. **El juez de tutela debe garantizar el goce efectivo del derecho, y en aquellos casos en que impartir una orden no basta, es necesario que el juez mantenga el control de la ejecución de la misma**. Es esa, precisamente, la razón por la que el Decreto 2591 de 1991 concede facultades especiales al juez en materia de tutela.¹¹ Por ello es posible, por ejemplo, que un juez de tutela considere necesario que la entidad que debe cumplir el mandato impartido en un fallo de tutela, deba entregar periódicamente informes al juez, para que éste verifique el cumplimiento del mismo, **pudiendo a la vez, adoptar determinaciones que permitan ajustar la orden original a la nuevas circunstancias que se puedan presentar todo con miras a garantizar el goce efectivo del derecho fundamental amparado y sin modificar la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada**.

4.6. Así pues, cuando el juez de tutela resuelve amparar el derecho cuya protección se invoca, **conserva la competencia para dictar órdenes** que aseguren que el derecho sea plenamente restablecido o las causas de la amenaza sean eliminadas, lo cual comprende **introducir ajustes a la orden original** siempre y cuando ello se haga dentro de los siguientes parámetros para que se respete la cosa juzgada: (1) La facultad puede ejercerse cuando debido a las *condiciones de hecho* es necesario modificar la orden, en sus aspectos accidentales, bien porque (a) **la orden original nunca garantizó el goce efectivo del derecho fundamental tutelado**, o lo hizo en un comienzo pero luego devino inane; (b) porque implica afectar de forma *grave, directa, cierta, manifiesta e inminente* el interés público o (c) porque es evidente que lo ordenado siempre será imposible de cumplir. (2) **La facultad debe ejercerse de acuerdo a la siguiente finalidad**: las medidas deben estar encaminadas a **lograr el cumplimiento de la decisión y el sentido original y esencial de la orden impartida en el fallo con el objeto de asegurar el goce efectivo del derecho fundamental tutelado**. (3) Al juez le es dado alterar la orden en sus aspectos *accidentales*, esto es, en cuanto a las condiciones de tiempo, modo y lugar, **siempre y cuando ello sea necesario para alcanzar dicha finalidad**. (4) La nueva orden que se profiera, **debe buscar la menor reducción posible de la protección concedida y compensar dicha reducción de manera inmediata y eficaz (...)**"

Negrilla intencional

Pues bien, a partir de las normas y precedente invocado, encuentra esta corporación que en este caso concreto resulta procedente **dictar órdenes** adicionales que aseguren que los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna y a la igualdad de la señora **GLADYS ROCÍO**

¹¹ Por ejemplo: **Artículo 7o.** Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere. | Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante. | La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible. | El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso. | El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere dictado. (Decreto 2591 de 1991) Al respecto también puede verse el artículo 27 del mismo Decreto 2591, citado previamente en esta sentencia.

VASQUEZ PUERTA sean plenamente restablecidos respetando los parámetros definidos por la Corte Constitucional para respetar la cosa juzgada. Y ello encuentra su razón de ser y justificación, tras verificar los siguientes aspectos:

- En primer lugar, de acuerdo con el análisis del acervo probatorio efectuado por la Sala en la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2021, el **10 de febrero de 2015 GLADYS ROCÍO** sufrió un aneurisma cerebral que le generó una Pérdida de Capacidad Laboral del 72.46%¹². En virtud de las diversas patologías sufridas la atención en salud ha sido brindada por diversos especialistas, y los médicos tratantes emitieron incapacidades continuas a partir de febrero de 2015¹³. La actora remitía los certificados de incapacidad al empleador BRISCON S.A. con LUZ DARY ATEHORTÚA su compañera de trabajo.
- En relación con el reconocimiento del subsidio por incapacidad temporal, la EPS reconoció su pago por los primeros 180 días, hasta el **10 de agosto de 2015**. Y en lo que tiene que ver con las incapacidades generadas con posterioridad al día 181¹⁴ el empleador BRISCON S.A. empezó a asumirlas y solo lo hizo hasta el mes de **septiembre de 2016**, habiéndose ordenado así en el proceso constitucional a **PROTECCION S.A.** cancelar las incapacidades dejadas de pagar a la señora **GLADYS ROCÍO VASQUEZ PUERTA** desde el mes de **octubre de 2016**.
- De acuerdo con la **HISTORIA CLÍNICA** allegada al plenario por el doctor **BASILIO VAGNER** el 28 de noviembre de 2022¹⁵, desde el **3 de septiembre de 2015** el diagnóstico principal de la accionante es **I694SECUELAS DE ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, NO ESPECIFICADA COMO HEMORRÁGICA U OCLUSIVA**; y se encuentra acreditada la emisión de incapacidades por éste galeno y otros especialistas por los primeros meses.
- En efecto, como consecuencia del accidente cerebrovascular padecido GLADYS ROCÍO ha sido atendida por un staff médico integrado por múltiples especialistas, que se acredita con las historias allegadas por la actora con ocasión de este trámite de cumplimiento¹⁶, en las que se advierte con claridad la existencia de otros diagnósticos todos ellos derivados del accidente cerebrovascular padecido el 10 de febrero de 2015:

¹² C01-ProcesoConstitucional – SubsidioIncapacidadProtección - Archivo 01 – página 24 a 32

¹³ C01-ProcesoConstitucional – SubsidioIncapacidadProtección Archivo 75 incapacidades

¹⁴ C01-ProcesoConstitucional – SubsidioIncapacidadProtección Archivo 75 incapacidades

¹⁵ C03TrámiteCumplimiento – carpeta 08HistoriaClínicaDrBasilioVagner

¹⁶ C03TrámiteCumplimiento – archivo 09 – correo electrónico del 28 de noviembre de 2022

RADICADO 05001 22 05 000 2021 00327

IPS	Historia clínica hasta/ Especialidad	Diagnósticos
IPS CENTRO DE REHABILITACIÓN ¹⁷	Historia clínica hasta octubre de 2022 en la especialidad de FISIATRÍA	I694 Secuelas de enfermedad cerebrovascular no especificada como hemorragia u oclusiva y según las atenciones concretas nuevos diagnósticos como R268 OTRAS ANORMALIDADES DE LA MARCHA Y LA MOVILIDAD, G819 HEMIPLEJÍA NO ESPECIFICADA, M751 SÍNDROME DEL MANGUITO ROTATORIO, G560 SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO y 549 – DORSALGIA.
HUMANITAS IPS ¹⁸	Historia clínica hasta 15 de noviembre de 2022 CONTROL DE HIPERTENSION ARTERIAL	Diagnóstico principal 10X – hipertensión esencial (primaria) - I698 Secuelas de otras enfermedades cerebrovasculares y de las no especificadas
CLÍNICA LAS AMÉRICAS ¹⁹	Historia clínica hasta el 7 de enero de 2022 en la especialidad de CARDIOLOGÍA VASCULAR	I500 insuficiencia cardíaca congestiva - I10X Hipertensión esencial (primaria).
CLÍNICA INCODOL ²⁰	Historia clínica hasta el 22 de noviembre de 2022 en la especialidad de CLÍNICA DEL DOLOR	I694 Secuelas de accidente vascular encefálico, no especificado como hemorrágico o isquémico y según las atenciones concretas nuevos diagnósticos como M792 Neuralgia y neuritis, no especificadas, M255 Dolor en articulación, M170 Gonartrosis primaria bilateral, M751 Síndrome de manguito rotatorio, M175 Otras gonartrosis secundarias, M796 Dolor en miembro, G819 Hemiplejía, no especificada, M159 Poliartrosis, no especificada. G588 Otras mononeuropatías especificadas.
CLÍNICA SAMEÍN ²¹	Historia clínica hasta el 19 de septiembre de 2022 en la especialidad de PSIQUIATRÍA	I694 Secuelas de enfermedad cerebrovascular, no especificada como hemorrágica u oclusiva , F412 Trastorno mixto de ansiedad y depresión, Z639 Problema no especificado relacionado con el grupo primario de apoyo.
CLÍNICA ANTIOQUIA S.A. ²²	Historia clínica hasta el 1 de agosto de 2022 en la especialidad de UROLOGÍA	N310 Vejiga neuropática no inhibida, no clasificada en otra parte, derivada del accidente cerebrovascular

¹⁷ C03TrámiteCumplimiento – Carpeta archivo 16

¹⁸ C03TrámiteCumplimiento – Carpeta archivo 15

¹⁹ C03TrámiteCumplimiento – Carpeta archivo 16

²⁰ C03TrámiteCumplimiento – archivo 17

²¹ C03TrámiteCumplimiento – archivo 14

²² C03TrámiteCumplimiento – archivo 07

- Ahora bien, el especialista en NEUROLOGÍA doctor BASILIO VAGNER, médico tratante de la accionante desde el **3 de septiembre de 2015** relató en la audiencia pública celebrada el 29 de noviembre de 2020²³ que inicialmente emitió incapacidades a GLADYS ROCÍO en razón de la ruptura de aneurisma en la arteria cerebral media izquierda en febrero de 2015, lo que alteró la irrigación de una parte de su cerebro generando como consecuencia una serie de limitaciones marcadas y significativas en el lenguaje, la fuerza en el miembro superior e inferior derecho así como alteraciones de pensamiento. Dice que comenzó a atenderla desde el año 2016 y la ha venido manejando durante todo este tiempo.

A la pregunta referida a por qué no ha emitido los certificados de incapacidad solicitados por GLADYS ROCÍO para el cumplimiento de la orden constitucional en contra de PROTECCIÓN referida al pago de subsidios por incapacidad a partir de octubre de 2006, responde:

“Normalmente nosotros podemos generar incapacidades en forma anterior, pero desde el punto de vista de generar incapacidades retrospectivas el sistema de SURA tiene un sistema en donde no me permite generar historias y notas pasadas en forma retrospectiva (...) es una de las situaciones más complicadas porque el sistema me bloquea, entonces no me da como el chance, entonces frente a esa condición yo le comenté a mi jefe, porque la idea es colaborarle a esta señorita que tiene bien complicada la cosa, hablé con mi jefe para para precisamente decirle que cómo podíamos colaborar, le comenté la situación a la doctora Paola Góez y ella habló con el grupo, con las personas que están encargadas de ese tipo de procesos (...)”

A la pregunta ¿si el problema no fuera del software, usted emitiría los certificados?

“Sí doctora, si estamos bajo una condición que es una paciente que realmente está en una situación muy compleja, muy difícil, yo consideraría que sí se deberían generar esas incapacidades, obviamente es un poco complicado, yo hablaría con mis jefes y les pediría, les comentaría la situación, pero yo creería que el deber ser sería ese proceso”

Y ya respecto a las incapacidades que se generen hacia adelante, explica que lo que les han instruido de la **EPS SURA** es que normalmente si el paciente lleva un período superior a 180 días no se genera incapacidad, y que el pago no sería a cargo de la EPS sino de la entidad de pensiones. Así precisa que, por tener más de 180 días de incapacidad, en teoría la indicación que se les ha dado de **EPS SURA** es que no se debería continuar con las incapacidades, siendo así una directriz de tal entidad; agregando que, bajo la condición actual de la paciente, se presenta una situación que se sale fuera de los parámetros y debería permitirse generarlas, así como retrospectivamente.

El doctor BASILIO VAGNER explica que es él quién se ha encargado de hacer la remisión de la paciente hacia los diferentes especialistas, el fisiatra, el factor respiratorio, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, cardiología, tiene un problema de hipertensión arterial complicado, urología por vejiga

²³ C03TrámteCumplimiento - archivos 11 y 12

neurogénica derivada del accidente cerebrovascular; resaltando que ha sido un grupo bien grande el que ha tenido que trabajar con ella, siendo él el especialista que está al frente para efectos de emitir las incapacidades que se ordenen.

Pues bien, en este contexto y ante el acervo probatorio recaudado, en criterio de esta corporación en este caso concreto se presentan todos los parámetros para emitir una modificación a las ordenes inicialmente proferidas, porque en los términos en que fueron emitidas no se garantiza el goce efectivo de los derechos fundamentales que fueron amparados; circunstancia a la que apunta la consagración constitucional que exige a los jueces garantizar el goce efectivo de los derechos (artículos 2 y 86, C.P.) como el Decreto 2591 de 1991 (art.27), que señala expresamente que el juez de tutela mantiene la competencia del proceso "(...) hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza."

En efecto, la orden a PROTECCIÓN S.A. es de *"cancelar las incapacidades dejadas de pagar a la señora GLADYS ROCÍO VASQUEZ PUERTA desde el mes de octubre de 2016 hasta que se defina jurídicamente si tiene derecho o no a la pensión; garantizando que no exista solución de continuidad entre el pago del subsidio y la eventual mesada pensional, resguardando de ese modo su derecho al mínimo vital. Y solo a partir de ese momento, cesarán los efectos de este fallo"*; pero se ha comprobado que el doctor BASILIO VAGNER, especialista en neurología que está al frente del diagnóstico principal de la accionante (I694 Secuelas de enfermedad cerebrovascular no especificada como hemorragia u oclusiva) - que constituye el origen de los múltiples secundarios que se atienden por las diferentes especialidades (fisiatría, cardiología, urología, psiquiatría, medicina del dolor, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, terapia física, etc)-; no ha emitido las incapacidades desde octubre de 2016 aduciendo una restricción del software así como el haber recibido la directriz de **EPS SURA** referida a no generarlas a los pacientes con incapacidades superiores a los 180 días.

Se advierte entonces, que para garantizar el cumplimiento de la orden constitucional por parte de PROTECCIÓN S.A. se impone **ORDENAR a EPS SURA** que dentro de las **cuarenta y ocho (48) siguientes** a la notificación de esta providencia adelante las gestiones administrativas necesarias y emita las incapacidades de la señora **GLADYS ROCÍO VASQUEZ PUERTA** desde el mes de **octubre de 2016** hasta **noviembre de 2022** por el diagnóstico principal **I694SECUELAS DE ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, NO ESPECIFICADA COMO HEMORRÁGICA U OCLUSIVA** definido por su médico tratante, el neurólogo **BASILIO VAGNER**.

Y ORDENARLE que en adelante y a partir del mes de **diciembre de 2022**, cada mes emita la incapacidad de la señora **GLADYS ROCÍO VASQUEZ PUERTA** por el diagnóstico principal **I694SECUELAS DE ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, NO ESPECIFICADA COMO HEMORRÁGICA U OCLUSIVA** a través de su médico tratante el neurólogo **BASILIO VAGNER, o quién haga sus veces**.

Esta decisión que adopta la Sala de modificar las órdenes inicialmente emitidas en la sentencia se justifica en la finalidad buscada, porque se trata de una medida encaminada a lograr el cumplimiento de la decisión. Es claro entonces que no se está alterando el contenido de la orden esencial de protección sino por el contrario, profiriendo ordenes adicionales para garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales, sin que impliquen en manera alguna una reducción en el grado de protección inicialmente otorgada a **GLADYS ROCÍO**.

Finalmente, y de acuerdo con los parámetros del precedente constitucional, es claro que este proceso versa sobre órdenes complejas, porque no solo involucra el concurso dos entidades y su actuar coordinado, sino que tal como ha quedado visto, el cumplimiento de PROTECCIÓN S.A. se encuentra sujeto a las incapacidades emitidas por SURA EPS, tanto por las generadas desde **octubre de 2016** así como las que se continúen generando en adelante cada mes *"hasta que se defina jurídicamente si tiene derecho o no a la pensión; garantizando que no exista solución de continuidad entre el pago del subsidio y la eventual mesada pensional, resguardando de ese modo su derecho al mínimo vital. Y solo a partir de ese momento, cesarán los efectos de este fallo"*.

Es por lo anterior que se **ORDENARÁ** a **PROTECCION S.A.** que a más tardar en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la radicación que efectuó la señora **GLADYS ROCÍO VASQUEZ PUERTA** de las incapacidades emita **EPS SURA** conforme las órdenes que se profieren en esta providencia, efectuó el pago del subsidio por incapacidad correspondiente.

4. LA DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Sexta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, **DECIDE**:

PRIMERO: ORDENAR a **EPS SURA** que dentro de las **cuarenta y ocho (48) siguientes** a la notificación de esta providencia adelante las gestiones administrativas necesarias y emita las incapacidades de la señora **GLADYS ROCÍO VASQUEZ PUERTA** desde el mes de **octubre de 2016** hasta **noviembre de 2022** por el diagnóstico principal

RADICADO 05001 22 05 000 2021 00327

I694SECUELAS DE ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, NO ESPECIFICADA COMO HEMORRÁGICA U OCLUSIVA definido por su médico tratante, el neurólogo **BASILIO VAGNER**.

SEGUNDO: ORDENAR a **EPS SURA** que en adelante y a partir del mes de **diciembre de 2022**, cada mes emita la incapacidad de la señora **GLADYS ROCÍO VASQUEZ PUERTA** por el diagnóstico principal **I694SECUELAS DE ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, NO ESPECIFICADA COMO HEMORRÁGICA U OCLUSIVA** definido por su médico tratante el neurólogo **BASILIO VAGNER**, o quién haga sus veces.

TERCERO: ORDENAR a **PROTECCION S.A.** que a más tardar en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la radicación que efectuó la señora **GLADYS ROCÍO VASQUEZ PUERTA** de las incapacidades definidas en los numerales anteriores, efectué el pago del subsidio por incapacidad correspondiente.

Estas decisiones se adoptan para garantizar el cumplimiento de la orden emitida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en la sentencia **STL 1420 -2022** en el numeral **TERCERO** dirigida a **PROTECCIÓN S.A.** de cancelar *“las incapacidades dejadas de pagar a la señora GLADYS ROCÍO VASQUEZ PUERTA desde el mes de octubre de 2016, hasta que se defina jurídicamente si tiene derecho o no a la pensión; garantizando que no exista solución de continuidad entre el pago del subsidio y la eventual mesada pensional, resguardando de ese modo su derecho al mínimo vital. Y solo a partir de ese momento, cesarán los efectos de este fallo”*.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma en constancia por quiénes en ella intervinieron.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 219 del 05 de diciembre de 2022

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>